



Empleados de la planta de automoción de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), en 2022. M. CEBRIÁN (GETTY)

## Stellantis y la china CATL invertirán 4.100 millones en la mayor planta de baterías de España

La gigafactoría, que estará ubicada en Zaragoza, comenzará a producir en 2026

MANU GRANDA  
Madrid

El grupo automovilístico Stellantis y el principal productor de baterías del mundo, la china CATL, invertirán 4.100 millones de euros para construir la mayor planta de baterías de España, que se levantará en Zaragoza. Ambas compañías oficializaron ayer la in-

versión, que se llevará cabo mediante una *joint venture* al 50%. El acuerdo se ha sellado tras el visto bueno del Ejecutivo chino de Xi Jinping, el último que faltaba por aceptarlo, y que dilató su decisión por el conflicto que mantiene con la UE por los aranceles extra impuestos a los vehículos eléctricos producidos en el país asiático.

La gigafactoría, que podrá contar con una capacidad de producción de unos 50 GWh de baterías de tecnología LFP (de litio-ferrofosfato), se prevé que comience la producción en 2026. Dichas baterías alimentarán la producción de vehículos eléctricos de Stellantis en España, que posee un variado crisol de marcas, co-

mo Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo o Lancia.

Alcanzar la capacidad máxima de producción dependerá de la evolución del mercado de vehículos eléctricos en Europa, a día de hoy estancado, y del "apoyo continuo de las autoridades en España y la UE", indicó Stellantis en un comunicado conjunto con CATL, con quien había firmado un memorando de entendimiento en noviembre de 2023. "Se espera que la operación se cierre a lo largo de 2025 y está sujeta a las condiciones reglamentarias habituales", añadieron ambas empresas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró esta inversión en su cuenta personal de la red so-

cial X, donde aseguró estar "muy satisfecho".

El acuerdo ha sido posible tras más de un año de negociaciones entre Stellantis y el Ejecutivo, que le ha otorgado al fabricante con sede en Luxemburgo 357,8 millones en subvenciones de los Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) y el Perte de Descarbonización, un dinero que se ha repartido entre las tres plantas de Stellantis en España, sobre todo en Vigo y Zaragoza (que son las que tienen su futuro industrial a medio y largo plazo más claro, a la espera de saber los planes para Madrid), y la propia gigafactoría en la capital maña. Esa suma ha sido suficiente para que la compañía termine eligiendo a España para una inversión estratégica, que seguramente no guste en Italia, país que emprendió una cruzada contra el ex consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, quien terminó dimitiendo sorpresivamente el 1 de diciembre.

Dicha salida produjo inquietud en el Gobierno español, porque muy poco antes Tavares se había reunido con Sánchez para los últimos flecos y oficializar definitivamente la inversión para la construcción de la planta de baterías. Sin embargo, esos fantasmas se despejaron rápidamente con la llamada telefónica que mantuvo John Elkann, presidente de Stellantis, con Sánchez, apenas un día después del adiós de Tavares.

Además, en la víspera de la oficialización del acuerdo, el presidente español se reunió, acompañado del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con el presidente y consejero delegado de CATL, Robin Zeng. Así, se le ha dado forma definitiva a esta inversión que supondrá un espaldarazo para la producción automovilística española, que se asegura así otra gran planta de baterías, además de la que el grupo Volkswagen está construyendo en Sagunto (Valencia); la que planea levantar la también china Envision, en Navalmoral de la Mata; y la que quiere construir InoBat en Valladolid. La de Stellantis es, hasta la fecha, la mayor inversión en una planta

de baterías en España, por delante de la de Volkswagen, que contará con unos 40 GWh de capacidad de producción, aunque esta podría incrementarse hasta los 60 GWh posteriormente.

"El objetivo de CATL es hacer accesible la tecnología de carbono cero en todo el mundo, y esperamos cooperar con nuestros socios a nivel mundial a través de modelos de cooperación más innovadores", señaló Zeng en el comunicado de ayer. "Stellantis está comprometida con un futuro descarbonizado, abarcando todas las tecnologías de baterías avanzadas disponibles para llevar productos competitivos de vehículos eléctricos a nuestros clientes", destacó por su parte Elkann. La tecnología LFP es vista por el sector como la vía más rápida para abaratar los vehículos eléctricos, ya que es una tecnología con una menor

**La tecnología LFP, en la que se centrará, pretende abaratar la movilidad eléctrica**

**El acuerdo dará en España un impulso a la producción automovilística**

densidad energética en comparación con las tradicionales NMC, lo que las hace tener una menor autonomía, pero ser más accesibles en precio. Por su parte, Hereu celebró en su cuenta de X la inversión. "España y su economía siguen atrayendo inversión, trabajo y futuro", añadió el ministro.

La construcción de la gigafactoría, unido a la futura instalación de la plataforma de producción STLA Small en las plantas de Vigo y Zaragoza, que conllevará una inversión de 900 millones, supondrá asegurar en la próxima década el empleo en las fábricas nacionales de Stellantis, que fue el mayor productor automovilístico de España el año pasado.

## El PSOE y Sumar pactan que las empresas que deslocalicen tengan que devolver las ayudas públicas

PABLO SEMPERE  
Madrid

El Gobierno de coalición logró un acuerdo de última hora para sacar adelante la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Tras una ronda de negociaciones que cogió ritmo el lunes y se prolongó hasta primera hora de la mañana de ayer, el PSOE y Sumar consensuaron una medida clave que obliga a las empresas a devolver todas las ayudas públicas recibidas, incluyendo los ERTE, si deciden deslocalizar su producción fuera de la zona eu-

ro. El objetivo de esta penalización es sostener al máximo posible el empleo y las inversiones realizadas en España.

Fuentes conocedoras de la norma afirman que esta pretende asegurar las inversiones realizadas en España y, por eso, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial tenga que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno. En el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrá que devolverlas si reduce en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plan-

tilla durante el periodo pactado, que será de tres y cinco años para pymes y grandes empresas, respectivamente.

Según fuentes de Sumar, la ley pone trabas decisivas a la deslocalización industrial a través de dos medidas "muy importantes". Por un lado, la empresa que abandone el espacio económico europeo de forma abrupta, es decir, antes del periodo pactado, tendrá que devolver el 100% de las ayudas públicas recibidas. Aquí se incluyen los ERTE (los expedientes de regulación temporal del empleo) y el mecanismo RED, además de otras ayudas

directas, que alcancen un importe superior a los tres millones de euros.

Por el otro, una deslocalización no podrá en ningún caso ser la justificación para un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio, ni individual ni colectivo. De esta manera, insisten en Sumar, "los fondos de inversión especulativos que trasladan las empresas de España a África o Asia no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en la legislación española".

Según la formación capita-

neada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este principio de condicionalidad es una herramienta esencial para evitar la pérdida de puestos de trabajo y garantizar un uso responsable de los recursos públicos. Y ponen como ejemplo el caso de Saint-Gobain, que cerró su división de fabricación de parabrisas en Avilés (Asturias) dejando a 160 trabajadores sin empleo.

Sumar también celebra que se haya incorporado al texto el principio de condicionalidad a la política industrial. De esta forma, la colaboración público-privada estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental. La ley sitúa la transición ecológica en el centro para aprovechar la ventaja de las energías renovables como palanca para la reindustrialización.